



# Mejores Sistemas de Protección Social y Empleo

en Centroamérica hacia una  
Recuperación Resiliente e Inclusiva



Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

© 2023, Banco Internacional  
de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial  
1818 H Street N.W.  
Washington D.C. 20433, Estados  
Unidos de Norteamérica

Teléfono: (202) 473-1000  
Página web: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)  
En español: [www.bancomundial.org](http://www.bancomundial.org)  
Correo electrónico: [feedback@worldbank.org](mailto:feedback@worldbank.org)

#### **Derechos reservados**

Este volumen es producto del personal del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en esta publicación no necesariamente reflejan la opinión de los Directores Ejecutivos del Banco Mundial o de los gobiernos que representan. El Banco Mundial no garantiza la exactitud de los datos incluidos en esta publicación.

#### **Derechos y permisos**

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial fomenta la difusión de su trabajo y permite reproducir partes de esta publicación siempre y cuando se cite la fuente.

# Resumen Ejecutivo

**Los sistemas de protección social y empleo (PSE) ayudan a las personas y a la sociedad a gestionar el riesgo y la volatilidad, y a protegerse de la pobreza mediante instrumentos que permiten afrontar los retos de la resiliencia, equidad y oportunidad.** Los sistemas de PSE incluyen asistencia social, seguridad social y programas de mercado laboral. Como se ha demostrado recientemente, la relativa prioridad entre los objetivos -resiliencia, equidad y oportunidad- puede cambiar en el tiempo, y las exigencias impuestas al diseño de programas de PSE y a los sistemas de implementación difieren en cada contexto. En tiempos relativamente estables, es probable que los programas se centren en la formación de capital humano, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la redistribución. Este era el caso en Centroamérica antes de la emergencia de COVID-19, aunque con algunas deficiencias. Aunque era reconocido antes durante los desastres naturales y de forma más amplia con el cambio climático, el objetivo de asegurar la capacidad de respuesta a los choques (resiliencia) pasó a primer plano de forma drástica durante la pandemia. A nivel mundial y en Centroamérica, los sistemas de PSE desempeñaron un papel fundamental en la respuesta a la emergencia del COVID-19.

**La naturaleza e intensidad de la pandemia de COVID-19 puso a prueba los sistemas de PSE en Centroamérica (y en todo el mundo) y sacó a la superficie algunas brechas y nuevas prioridades.** Aunque ningún país podía estar totalmente preparado para la emergencia, los sistemas de PSE centroamericanos se enfrentaban a retos persistentes, en diversos grados, incluso en los periodos relativamente estables previos a la pandemia (por ejemplo, fondos insuficientes en los programas dirigidos a reducir la pobreza, falta de registros sociales dinámicos y uso limitado de pagos digitales). Estos problemas se convirtieron en obstáculos para aprovechar eficazmente los sistemas de PSE durante la pandemia. Además, la naturaleza de la crisis acentuó la brecha de cobertura para la nueva población vulnerable, aquellos que normalmente quedan fuera tanto de las redes de seguridad, como de los sistemas formales, lo que podría denominarse el “segmento intermedio no atendido” (“missed middle”). Esto obligó a ampliar la definición de vulnerabilidad y validó la importancia de mejorar la capacidad de adaptación de los sistemas de protección social.

**El fortalecimiento de los sistemas de PSE es una inversión prioritaria tanto para sentar las bases de un crecimiento inclusivo más fuerte en la subregión, como para aumentar la resiliencia, a la luz del aumento de choques, incluidos los relacionados con el cambio climático.** Los sistemas de PSE adaptables y eficaces, que preserven, restauren y busquen aumentar el capital humano, son tan importantes para la recuperación inclusiva como las reformas estructurales. Los sistemas de PSE también pueden aprovecharse para la adaptación al cambio climático y su mitigación. Este informe presenta una visión general de los retos de los sistemas de protección social antes y después de COVID-19, con el objetivo principal de proporcionar directrices para la implementación de políticas.<sup>1</sup> Se centra

<sup>1</sup> Dado que está previsto realizar un análisis en profundidad de los sistemas de pensiones en América Central como parte del futuro trabajo analítico, queda fuera del alcance de este informe.

en la asistencia social y los programas laborales, al mismo tiempo destaca algunos vínculos con los sistemas de pensiones. Si bien se reconoce que la mayoría de los países se enfrentan a restricciones fiscales (agravadas por la COVID-19), una conclusión clara es que se requieren inversiones en la subregión para mejorar los sistemas de implementación de los programas de PSE y aumentar sus recursos con el fin de fortalecer la cobertura y el desempeño del sector, incluida la adaptabilidad a la crisis.

**Los pilares básicos de PSE reflejan distintos niveles de desarrollo en la subregión.** La seguridad social (contributiva y no contributiva) existe en la mayoría de los países, pero está poco desarrollada: con excepción de Costa Rica y Panamá, la cobertura de la población en edad de trabajar está por debajo de la media de la América Latina y Caribe (LAC). No existe seguro de desempleo. Una serie de programas de asistencia social constituye el grueso del número de programas en la mayoría de los casos, aunque no necesariamente del gasto. Los programas y servicios del mercado laboral son una parte muy pequeña del sistema de PSE en la mayoría de los países. Si bien el nivel de desarrollo y los desafíos varían ampliamente a lo largo y dentro de Centroamérica, dependiendo de qué parte del sistema de PSE se considere, hay tres temas comunes. Estos son: (i) eficacia limitada del gasto en Protección Social (PS) y sus programas; (ii) adaptabilidad limitada de la PS y sus sistemas de implementación; y (iii) problemas estructurales que limitan los resultados del empleo para los trabajadores y la economía. El informe analiza estos retos antes y durante la respuesta a la pandemia de COVID-19.

### *Eficacia del gasto de PS y los programas previos a COVID-19*

**Los países de América Central han avanzado considerablemente hacia un sistema de asistencia social más integral.** En todos los países centroamericanos existen redes de seguridad social que cubren diferentes segmentos de la población. Entre ellas se incluyen los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en la mayoría de los países (excepto Nicaragua), cuyo objetivo es promover el desarrollo del capital humano y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.

**La mayoría de los países de la subregión gastan poco en asistencia social y mucho en programas categóricos amplios en lugar de programas dirigidos a aliviar la pobreza, lo que da lugar a una elevada cobertura tanto de ricos como de pobres.** La mayoría de los países centroamericanos gastan menos que el promedio de LAC en asistencia social. El Salvador y Costa Rica son excepciones; Honduras y Guatemala son los que menos gastan. A pesar de los recursos limitados, los programas categóricos, que se implementan de manera generalizada, superan a otros gastos de asistencia social, en particular al de los programas orientados a aliviar la pobreza, los cuales carecen de fondos suficientes. La cobertura de la asistencia social en la subregión, tanto del quintil más pobre como del más rico, es generalmente superior a la media de LAC, impulsada principalmente por los programas categóricos. Este patrón de gasto significa que la mayoría de los países se enfrentan a un verdadero dilema entre los objetivos del equilibrio fiscal, el alivio de la pobreza junto a la acumulación de capital humano de las personas pobres, y la amplia distribución de beneficios. Los problemas de la seguridad social (incluido un sistema contributivo caro con elevados costos de transición) solo exacerban el dilema.

**En general, la asistencia social en América Central es menos progresiva en comparación con el promedio de LAC; en la mayoría de los países, los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) son una excepción, pero su potencial se ve obstaculizado por la baja cobertura y beneficios.** Dentro de la subregión, incluso en los países donde la asistencia social general es más progresiva (Costa Rica y Honduras), un poco menos de un tercio de los beneficiarios de la asistencia social pertenecen al quintil más pobre, en comparación con el promedio de LAC de un poco menos de la mitad. Existen diferencias significativas entre los programas. Por ejemplo, con excepción de Nicaragua (sin TMC), la República Dominicana y Guatemala, los programas de TMC en la subregión están bien focalizados (medidos como proporción del total de beneficiarios de TMC que pertenecen al primer quintil), igualando o superando la media de LAC del 54%. Sin embargo, la cobertura de las TMC (es decir, la proporción de individuos del quintil más bajo que se benefician de este tipo de

programas) es baja. Sólo República Dominicana y Costa Rica se acercan a la media de LAC. Asimismo, con excepción de Honduras, los niveles de beneficios de las TMC son menos adecuados que la media de LAC. Por lo tanto, a pesar de la buena focalización, la baja cobertura y lo inadecuado de los beneficios limitan el impacto potencial de las TMC para reducir la pobreza y mejorar los resultados del capital humano, que son relativamente bajos en todos los países excepto en Costa Rica.

### *Alcance limitado de los programas de PS para enfrentar la pandemia de COVID-19*

**La pandemia de COVID-19 amenaza con erosionar los avances en capital humano y reducción de la pobreza que tanto costó conseguir.** Las estimaciones para 2020 sugieren que la pobreza empeoró en todos los países centroamericanos, con los mayores aumentos previstos para Panamá (50%) y Costa Rica (40%). Los datos iniciales apuntan a un impacto desproporcionado en los pobres y vulnerables, lo que ampliará aún más las brechas en capital humano. Las consecuencias económicas de la pandemia causaron pérdidas generalizadas de empleo e ingresos, disminuyeron la seguridad alimentaria y limitaron el acceso a la educación y la atención sanitaria. Las simulaciones del impacto de la COVID-19 sobre el capital humano apuntan a descensos del ICH (Índice de Capital Humano) en la subregión, siendo Costa Rica y Panamá, países de ingreso medio-alto, los más afectados.

**La mayoría de los países de la subregión actuaron rápidamente para contener los impactos del COVID-19, sin embargo, los costos asociados a esto aumentaron la presión fiscal.** El tamaño de los paquetes de emergencia osciló entre alrededor del 1.5% del PIB (Costa Rica) y el 3.4% del PIB (Guatemala), excepto en El Salvador donde el costo alcanzó el 15.5% del PIB, poniendo a la mayoría de los países en una situación fiscal vulnerable. El fuerte descenso de las tasas de empleo, así como el aumento de nuevos jubilados, también ejercieron presión sobre los regímenes de pensiones de la subregión. Incluso países como Costa Rica, que no se enfrentaban a problemas de sostenibilidad fiscal, se han visto repentinamente atrapados en problemas inesperados.

### *Adaptación limitada de los programas de PS y sus sistemas de implementación*

**Los países centroamericanos invirtieron en sus sistemas de implementación de PS durante la pasada década.** Todos los países han avanzado en la integración de funciones en todos los programas, incluido el desarrollo de sistemas de información social y plataformas de pago consolidadas. Los registros sociales apoyan los procesos de entrada, registro y evaluación, con una cobertura que oscila entre el 70% o más en Costa Rica y la República Dominicana, y el 9% en El Salvador. En Guatemala se está poniendo a prueba un registro social. Sin embargo, la recepción y el registro de información en los registros sociales se han basado en gran medida en oleadas *masivas* poco frecuentes (con excepción de Panamá y Costa Rica), por lo que los datos no suelen estar actualizados. Los pagos en la subregión incluyen modalidades de pago en ventanilla (sin cuentas asociadas) en algunos lugares, aunque algunos países, como Panamá, han avanzado hacia la integración y la digitalización. El uso limitado de los pagos digitales en la mayoría de los países significó una limitación.

### *Obstáculos en el aprovechamiento de los sistemas de implementación de PS para responder a COVID-19*

**La escasa capacidad de adaptación de los sistemas de implementación de servicios en Centroamérica afectó negativamente a la calidad y la puntualidad de la respuesta de la protección social a la pandemia, sin embargo, se impulsó la digitalización de los pagos.** Los obstáculos impidieron aprovechar los programas de redes de protección social para proteger a los beneficiarios existentes y ampliar la cobertura a la nueva población vulnerable: algunos gobiernos tuvieron que crear sistemas paralelos para responder con rapidez. Dependiendo de la situación del registro social, los países de la subregión aplicaron muchos de los mismos enfoques utilizados a nivel mundial para determinar la elegibilidad para las transferencias de emergencia: el aprovechamiento de los datos del registro social (República

Dominicana); aplicaciones por demanda (Costa Rica); y nuevas fuentes de datos como el uso de servicios públicos (El Salvador y Guatemala). La validación de información con bases de datos administrativas complementaron los dos primeros enfoques. COVID-19 impulsó las innovaciones en materia de pagos, incluida una mayor digitalización. En Guatemala, los pagos de la transferencia de emergencia Bono Familia se digitalizaron mediante la creación de cuentas virtuales. En Honduras, el gobierno puso en marcha un mecanismo integral de pagos digitales en 2020.

### *Los problemas estructurales limitan los resultados del empleo para los trabajadores y la economía*

**Antes de COVID -19 la mayoría de los empleos en la subregión eran de baja calidad.** La mayoría de los empleos en Centroamérica son de servicios. Aunque no todos estos empleos son de baja calidad, con excepción de Costa Rica y Panamá, la mayoría de los empleos en servicios son informales, probablemente concentrados en ocupaciones elementales de baja productividad. En casi todos los países, una parte significativa del empleo es informal, desde el 49% en Panamá y hasta el 82% en Honduras, lo que deja a grandes franjas de la población empleada en una situación de vulnerabilidad. Costa Rica es la excepción, con aproximadamente un tercio de empleo informal. La informalidad ha persistido en la mayoría de los países, impulsada por múltiples barreras para la formalización, rigideces del mercado laboral en algunas dimensiones y políticas de salario mínimo.

**El acceso a empleos de calidad es especialmente limitado para quienes se encuentran en la parte baja de la distribución de ingresos y para quienes viven en zonas rurales.** Aunque la mayoría de los empleos son de baja calidad en toda la subregión, la incidencia es mucho mayor en la población del 40% más bajo de la distribución de ingresos en comparación con el 60% más alto en la mayoría de los países, por ejemplo, en Panamá se alcanza una diferencia de 40 puntos porcentuales. Además, la incidencia del trabajo no remunerado es mayor en la parte inferior de la distribución de ingresos, mientras que ocurre lo contrario con el empleo asalariado en todos los países, con hogares pobres (y probablemente rurales) atrapados en la agricultura de subsistencia o en empresas particulares, mientras que otros hogares (probablemente urbanos) disfrutaban de acceso a mejores empleos.

**Asimismo, los trabajadores poco calificados, los jóvenes y las mujeres se enfrentan a peores resultados en el mercado laboral en la mayoría de los países.** Las personas poco calificadas tienen más probabilidades de tener un empleo informal o de estar desempleadas, aunque la brecha varía mucho de un país a otro, y las diferencias más pequeñas entre las personas con un nivel educativo alto y bajo se dan en la República Dominicana y Panamá. Los jóvenes tienen una menor tasa de participación en la fuerza laboral, e incluso cuando están empleados tienen más probabilidades de estar en empleos informales y en sectores de baja productividad, lo que está vinculado a unos ingresos más bajos. La proporción de jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés) oscila entre menos del 20% en Panamá y Costa Rica, y casi el 30% en Honduras y Guatemala. Las mujeres constituyen la mayoría de los NEETs. Aunque las diferencias de género en los resultados del mercado laboral se han reducido en casi todos los países, las disparidades persistentes son particularmente grandes en algunos países. Por ejemplo, en Guatemala la participación de las mujeres en el mercado laboral es la mitad que la de los hombres en términos relativos. Un análisis comparativo entre países sugiere que si las mujeres participaran en el mercado laboral al mismo ritmo que los hombres el PIB per cápita oscilaría entre un 16% más en El Salvador (igual que la media de LAC) y un 25% más en Guatemala. Incluso cuando las mujeres participan en el mercado laboral, tienen más probabilidades de estar desempleadas o de tener un empleo informal y de ganar menos, a pesar de tener más estudios en la mayoría de los casos. Las responsabilidades de cuidado parecen ser la barrera más restrictiva para las mujeres.

**A pesar de los avances en el nivel educativo, en general, la oferta de habilidades en la mano de obra de la mayoría de los países sigue siendo baja y desfasada respecto a los empleos del futuro, y la capacidad de apoyo al empleo es heterogénea.** Aunque el nivel educativo de la mano de obra en la mayoría de los países ha aumentado constantemente, sigue siendo bajo. Además, aunque un mayor nivel educativo suele traducirse en mayores ingresos, el retorno de la educación ha disminuido en algunos países (El Salvador y Guatemala). Todos los países de la subregión disponen de algunos de los elementos básicos para el apoyo al empleo, pero la capacidad es heterogénea. En un extremo está Costa Rica, que ha modernizado su principal agencia de formación para adaptarse mejor a las cambiantes necesidades del mercado laboral. En el otro extremo está Honduras, cuyo sistema de educación y formación técnica vocacional (TVET, por sus siglas en inglés) cuenta con los elementos básicos, pero está desfasado y tiene dificultades para capacitar en las habilidades demandadas y apoyar a los jóvenes y a quienes buscan empleo por primera vez. Otros países se enfrentan a problemas similares. Con excepción de Costa Rica, la cobertura de los programas del mercado laboral es baja.

### *La pandemia de COVID-19 agravó los retos del mercado laboral*

**El impacto de la pandemia exacerbó los problemas subregionales en el mercado laboral.** El choque de la COVID-19 afectó a través de dos canales principales en el mercado laboral: (i) las medidas de confinamiento cerraron grandes partes de la economía; y (ii) las actividades de consumo disminuyeron para minimizar el riesgo de contagio. En general, los países con mayores contracciones del PIB también perdieron más puestos de trabajo. Los efectos negativos se concentraron en los empleos que requieren de contacto con la gente, los cuales tienden a ser informales, requieren de menos habilidades y generan menor ingreso, lo que exacerba las divisiones existentes en el mercado laboral. Muchos hogares experimentaron importantes pérdidas de ingresos: los trabajadores de servicios y la industria fueron los más afectados, al igual que, en general, los trabajadores independientes. Los nuevos datos confirman el mayor impacto de la pandemia en los jóvenes, los trabajadores menos calificados y las mujeres, que sufrieron mayores pérdidas de empleo, aumentando aún más su vulnerabilidad. Dada la limitada disponibilidad de estabilizadores automáticos, no existían mecanismos para llegar a los trabajadores formales o informales afectados por la pandemia.

### *Respuesta de PSE de los Gobiernos a la emergencia COVID-19*

**Para responder a la crisis, los gobiernos de la subregión aprovecharon en distinto grado los instrumentos existentes de PSE mediante la prestación de servicios de asistencia social, seguridad social y mercado laboral.** Todos los países (excepto Nicaragua) desplegaron transferencias de efectivo principalmente para llegar a nuevos beneficiarios, incluidos los trabajadores informales. La escala y la duración de los beneficios fue diversa. Entre los países con transferencias de efectivo a mayor escala se encontraba Panamá, que llegó a alcanzar a casi el 80% de la población. Asimismo, en Guatemala, la cobertura de las transferencias de efectivo se amplió de sólo el 5 por ciento de los hogares al 80 por ciento tras el establecimiento del programa temporal de transferencia monetaria *Bono Familia*. Las medidas de asistencia social en casi todos los países incluían ayudas en especie para contribuir a la seguridad alimentaria y exenciones de las tarifas de los servicios públicos. Las medidas de seguridad social fueron limitadas debido a la escasa cobertura y a la falta de seguro de desempleo. Las medidas relativas al mercado laboral incluían el acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (formales e informales) (El Salvador y Panamá), así como garantías crediticias (Costa Rica), subsidios salariales o apoyos similares para trabajadores formales (Guatemala, República Dominicana, Honduras y El Salvador) y en capacitación (Costa Rica y Panamá). En el segundo caso, algunas iniciativas fueron acompañadas de ayudas de asistencia social (Costa Rica). En toda la subregión se adaptó la normativa laboral al trabajo a distancia.

Figura 1. Panorama de Directrices de Política



### *El camino a seguir para reforzar los sistemas adaptativos de PSE con vistas a una recuperación más inclusiva y resiliente – Directrices de política*

Los retos preexistentes y emergentes, así como el conocimiento global, apuntan a 3 directrices de política para que los sistemas de PSE en Centroamérica apoyen una recuperación resiliente e inclusiva. Las directrices de política para los sistemas de PSE son (i) mejorar la eficiencia y eficacia del gasto en PS y garantizar la combinación adecuada de programas; (ii) mejorar la capacidad de adaptación e invertir en sistemas de implementación; y (iii) fortalecer los servicios e instituciones de empleo para apoyar un rápido retorno a los empleos (productivos).

#### *Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto en PS y garantizar la combinación adecuada de programas*

Las medidas para aumentar la eficiencia del gasto en PS son distintas entre países, pero en general implican un cambio de programas menos progresivos a programas mejor focalizados y/o la mejora de la focalización de los programas categóricos grandes, por ejemplo, mediante:

- Mejorar el impacto distributivo de los subsidios energéticos pasando a una elegibilidad basada en indicadores socioeconómicos como primer paso, y más tarde racionalizándolos en el sistema de asistencia social para aprovechar los mecanismos de identificación de los pobres;



- En la transición hacia la salida de los programas de emergencia, equilibrar la protección continua de los más pobres con el espacio fiscal reducido; y
- Reequilibrar los regímenes de pensiones para impulsar la sostenibilidad fiscal.

**Dado el impacto desproporcionado de la pandemia en los más pobres, será imperativo seguir construyendo y protegiendo el capital humano mediante programas de asistencia social más eficaces, mas específicamente a través de:**

- Seguir invirtiendo en programas de transferencia monetaria bien focalizados e, idealmente, ampliarlos.
- Incorporar enfoques sensibles a la nutrición, incluyendo elementos de comportamiento, para mejorar los resultados positivos, que han sido probados, de los programas progresivos de asistencia social, como las TMC. Existen modelos exitosos. Una intervención piloto con visitas a domicilio y sesiones de grupo con los padres en Guatemala tuvo efectos positivos en el desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños. El programa brasileño Feliz Crianza combina elementos similares con un programa de asistencia social.

**La combinación de instrumentos de protección social en la subregión debe reflejar la importancia de los estabilizadores automáticos y la capacidad de los programas para aumentar la resiliencia y la preparación frente a choques futuros.**

- Los estabilizadores automáticos potenciales incluyen programas sociales progresivos con cobertura adecuada y flexibilidad para expandirse, así como seguros de desempleo en países donde las tasas de formalidad son más altas incluso en la parte inferior de la distribución de ingresos (Costa Rica y República Dominicana).
- La adaptabilidad de los programas puede mejorarse incorporando elementos de inclusión productiva, así como activadores y protocolos de emergencia que permitan una rápida escalabilidad.

*Mejorar la capacidad de adaptación del sistema de PSE e invertir en sistemas de implementación para una mejor preparación ante los choques.*

**El choque COVID-19 reforzó la necesidad de mejorar la capacidad de adaptación de los sistemas de PSE, más aún de cara al futuro, considerando la exposición de Centroamérica a choques probablemente más frecuentes.** Es fundamental seguir invirtiendo en el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de implementación para hacerlos más inclusivos, dinámicos y adaptables. A partir de las lecciones aprendidas a nivel mundial y en Centroamérica durante la respuesta de emergencia, las prioridades incluyen:

- **Introducir la inscripción abierta y continua** por demanda, así como diferentes modalidades de inscripción (presencial en oficinas gubernamentales, en línea y por teléfono);
- **Desarrollar registros sociales dinámicos con mejor cobertura** y apoyarse en otras bases de datos administrativas para realizar validaciones de información, entre otros fines, mediante inversiones en interoperabilidad;
- **Avanzar hacia sistemas integrales de información social**, incorporando datos de registros sociales y registros de beneficiarios, entre otros, idealmente con capacidad para monitorear no sólo la demanda, sino también la oferta de programas;
- **Promover los métodos de pago digitales y la apertura de cuentas**, con beneficios para el gobierno (aumento de la eficiencia) y los receptores (comodidad e inclusión financiera); e
- **Intensificar el uso de la tecnología más allá de los pagos** en toda la cadena de implementación para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de procesamiento, por ejemplo, en la admisión y el registro, la notificación, la inscripción, la actualización de los datos de los beneficiarios y los mecanismos de reparación de agravios

### *Reforzar las instituciones de mercado laboral y los servicios para ayudar a las personas a volver al trabajo (productivo)*

Es necesario un enfoque múltiple para reforzar las políticas y los servicios de empleo, en consonancia con un cambio en el papel del gobierno, que pasaría de proteger a los trabajadores del cambio a protegerlos para el cambio. El planteamiento implica:

- **Mejorar los sistemas de información sobre el mercado laboral**, entre otras, mediante el uso de datos en tiempo real para comprender y supervisar la demanda de mano de obra, con el fin de orientar el apoyo al reemplazo, en particular la formación;
- **Desplegar intervenciones bien diseñadas e integrales** (que combinen la demanda y la oferta) para ayudar, en particular, a los jóvenes y otras personas vulnerables a volver al trabajo, aprovechando la evidencia de efectos positivos y más sostenidos, por ejemplo, combinando subsidios salariales con servicios de formación y/o empleo;
- **Promover la capacitación dirigida y proporcionada por el sector privado** para garantizar habilidades pertinentes y una mejor adecuación a los puestos de trabajo, lo que implica un cambio en el enfoque tradicional de la TVET (por sus siglas en inglés) a la hora de impartir capacitación;
- **Fortalecimiento de la capacidad institucional de intermediación**, con el apoyo de la tecnología para desarrollar portales de *matching* laboral, la introducción de herramientas de perfilamiento para ayudar a priorizar los recursos entre los solicitantes de empleo y emparejar mejor los diferentes grupos de participantes con las políticas activas de empleo adecuadas, y la digitalización de los servicios;
- **Garantizar un presupuesto adecuado para apoyar el empleo**, una lucha para los países de la subregión; y
- **Promover reformas del mercado laboral** para apoyar la creación de mejores puestos de trabajo, incluida la modernización de la normativa sobre el mercado laboral, la adecuación del salario mínimo al crecimiento de la productividad laboral y el establecimiento de normas mínimas en todos los tipos de contratos.





**WORLD BANK GROUP**  
Social Protection & Jobs